
LA IZQUIERDA: EXPERIMENTAR NUEVAS FORMAS, AVANZAR NUEVAS IDEAS

Jordi Borja



La perplejidad es la palabra de moda para referirse al debate intelectual de la izquierda. Pero la política no admite mucho tiempo la perplejidad, sólo es un momento para salir del dogmatismo o para superar instrumentos que ya no sirven.

A menudo, quienes no sienten esta perplejidad descubren nuevas-viejas certezas: el nacionalismo, el liberalismo, el mercado, la sociedad civil. Nos permitimos desconfiar de la recuperación de conceptos tradicionales de la derecha o de la equívoca traducción política. Si de lo que se trata es de ser nacionalista, liberal, capitalista o anarco-conservador, quiere decir que

miramos hacia atrás y que olvidamos que «volver a aquellas aguas traerá estos barro».

Hay quienes resisten y se hacen fuertes en legítimas fortalezas institucionales o en órganos de dirección partidarios. Pero cuando los resistentes se niegan a reconocer que en la bañera hay tanta agua sucia

que casi no se ve al niño, corren el gran riesgo, cuando se haga limpieza, de tirar el niño antes que el agua.

Que se nos permita, pues, apuntar algunas ideas y prácticas que no funcionan o, al menos, que no nos lo parece. Y nos atrevemos a proponer otras con la esperanza de que sirvan un poquito... Probémoslo.

Hay momentos en que es preciso abocarse a la acción hacia el exterior, en todas direcciones, hacia todo, hacia todos. Mejor o peor, son épocas en que el político, el intelectual, el militante disponen de un instrumental teórico para analizar, de un proyecto global para orientarse y de una credibilidad que les permite influir en la sociedad. No es el caso. Ahora y para la izquierda todo es cuestionable. Es un momento en que es indispensable el estudio y la reflexión, el debate riguroso y la verificación. Es el momento de *experimentar*.

Partidos y sociedad

Los estudios y sondeos sociológicos, la práctica política desde las instituciones y organizaciones, así como la observación directa del ciudadano, coinciden: los partidos despiertan poco interés y tienen poca credibilidad. Es evidente que hay razones históricas y socioculturales, pero es probable que los partidos no se hayan esforzado demasiado en enraizarse en la sociedad. Nos referimos, sobre todo, a los partidos de izquierdas, de los cuales tradicionalmente se supone una fuerte actividad en la base de la sociedad. En cambio, hoy se ven a menudo desplazados por el nacionalismo (vasco y catalán), e incluso por la derecha política (AP en muchas regiones españolas) o social (movimientos escolares, gremiales, etc.) en cuanto a capacidad de movilización social y número de militantes, aunque se conserve, en el caso de los socialistas, una previsible mayoría electoral (por lo menos relativa).

Se precisan unas estructuras militantes de base que sean mecanismos reales de comunicación con la sociedad y no obstáculos para esta comunicación.

Fijémonos primero en la *militancia*. Aunque no se dispone de datos exactos, se puede suponer que todos los partidos juntos no llegan a 500.000 afiliados, de

los cuales el 50 por 100 forman parte de partidos de izquierdas. La relación aproximada es de un miembro por cada 200 electores (en Suecia, para el partido socialdemócrata es de uno a 10). En un pasado reciente se oponía el modelo comunista (muchos militantes y pocos votos) con el socialista (pocos militantes y muchos votos). Es una distinción que ya no sirve. Los comunistas han perdido, juntamente con los votos, los militantes, y los socialistas echan en falta la militancia para comunicar con la ciudadanía. Ahora bien, se precisan unas estructuras militantes de base que sean mecanismos reales de comunicación con la sociedad y no obstáculos para esta comunicación, como pasa a menudo con agrupaciones de partidos próximas a la secta o al grupo de presión interno. ¿Los locales están abiertos al público, prestan servicios y son agradables? ¿Los militantes se reclutan en función de sus responsabilidades sociales, representan alguna cosa más aparte de la adhesión al partido? ¿El partido de base ideológica rigurosa es un buen comunicador social?

Esta primera reflexión nos conduce a un segundo tema: la *capilaridad social* de los partidos, es decir, su capacidad de recoger las demandas mediante la presencia organizada en el territorio y por vía de los electos. La debilidad orgánica de los partidos, la fragmentación del tejido social y la falta de grandes objetivos movilizados, han conducido a un bajo nivel de capilaridad social. Por otra parte, el *sistema electoral* (grandes circunscripciones, multiplicación y confusión de las estructuras representativas, sistema proporcional con listas cerradas y bloqueadas) establece una gran distancia entre elegido y elector: éste no sabe nunca quién es el representante adecuado para plantearle su problema.

La débil capilaridad social es, sin duda, una de las causas principales de la insuficiente representatividad de los intereses *sociales, económicos y culturales* por parte de los partidos, especialmente los de izquierda (aunque tampoco los partidos de derecha o conservadores han consolidado su representación sociológica e ideológica).

A menudo se argumenta que los partidos no han de responder a clientelas, ni a corporativismos, ni a grupos de presión. Seguramente no es deseable que los partidos se conviertan en instrumentos mecánicos de una suma de pequeños intereses, pero quizá aún es peor que no sean receptores a estos intereses y, por lo tanto, no puedan asumirlos y sintetizarlos cuando sea posible. Los partidos de izquierda tienen hoy una articulación con los sindicatos, y los socialistas, por el hecho de gobernar, están fuertemente sometidos a la presión de los grupos económicos, sociales o ideológicos más fuertes y organizados. Pero como consecuencia también de la enorme fragmentación de los intereses y de las aspiraciones colectivas, y del bajo nivel de organización social, la capacidad de influencia de la sociedad civil sobre los partidos es escasa. Demasiada autonomía política puede acabar resultando paralizadora por las fuerzas que quieren promover el cambio y el progreso.

Ante este panorama, ¿qué propuestas pueden hacerse? Queremos limitarnos a adelantar algunas de carácter técnico-político, en relación a los partidos, para mejorar su credibilidad y su inserción sociales.

Los sistemas electorales. El sistema proporcional garantiza una aceptable representatividad del conjunto del electorado y consolida las estructuras centrales de los grandes partidos, pero ya hemos dicho que hace muy anónima la relación del elector con sus representantes y otorga un excesivo poder decisorio a los aparatos partidarios que designan los candidatos. Algunas medidas correctoras podrían ser:

— Hacer circunscripciones más pequeñas en las zonas más pobladas, tanto para las elecciones generales (Congreso de los Diputados) como autonómicas (podría ser la comarca).

— Introducir el *panachage* (mezcla de candidatos de listas diferentes), o, al menos, el voto preferencial en algún tipo de elecciones (autonómicas o locales).

— En las elecciones locales pueden experimentarse otras fórmulas: dos vueltas, elección directa del Alcalde (en los municipios pequeños) o elecciones por distritos (en los grandes municipios, independientemente de que se elijan consejeros de distrito).

— Facilitar la constitución de agrupaciones de electores y de federaciones de agrupaciones, e incluso de candidatos individuales (en las elecciones locales y en municipios pequeños o medianos podría probarse un sistema electoral similar al del Estado).

— Elecciones primarias para designar a los candidatos, al menos los destinados a ocupar los primeros lugares.

— Ligar el financiamiento de los partidos, según los resultados electorales obtenidos, al mantenimiento de oficinas de información a los electores y de recepción de las demandas (como mínimo a las circunscripciones donde tienen elegidos).

Clarificar el sistema institucional. Una de las causas probables del escepticismo colectivo hacia las instituciones y los elegidos es la imagen de confusión que ofrece la estructura política, en la cual se mantienen instituciones que sobran y faltan otras que son esperadas:

— El Senado habría de ser la Cámara de las Autonomías, y los senadores elegidos únicamente por los Parlamentos autonómicos.

Son los mismos partidos los que han de adoptar unas formas de organización y de funcionamiento que posibiliten su enraizamiento social y la participación popular.

— El Congreso de los Diputados tendría que abrirse más a la sociedad, por ejemplo, multiplicando las relaciones entre las Comisiones y los grupos parlamentarios con los Ayuntamientos y las organizaciones sociales y cívicas.

— La consolidación político-administrativa de la Autonomía supone que la Generalitat sea el Estado en Catalunya y que, por tanto, desaparezca o se reduzca al mínimo la Administración periférica (por ejemplo, los gobernadores civiles tendrían que desaparecer), y evitar las duplicidades (por ejemplo, en lugar de crear policía autonómica más valdría que las fuerzas del orden público dependiesen funcionalmente de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos).

— Es necesario simplificar la estructura política territorial y no caer en la tentación de multiplicar los niveles. Comunidad Autónoma y Municipio han de ser las estructuras políticas básicas. Las estructuras intermedias, como las comarcas, podrían ser el ámbito de cooperación intermunicipal (y en los casos de municipios muy pequeños, favorecer su agrupación o fusión). Mantener o crear más estructuras intermedias, sobre todo electivas, únicamente servirá para aumentar la confusión de los ciudadanos y el descrédito de las instituciones.

Organización y funcionamiento interno de los partidos

La regulación pública de los partidos es una cuestión delicada pero indispensable para garantizar sus derechos y deberes en un sistema político representativo y pluralista, que requiere presencia, transparencia y eficacia de los mecanismos partidarios. Ya hemos citado algunos procedimientos posibles que pueden ser objeto de regulación pública, como la obligación de tener locales abiertos y de prestación

de servicios a los ciudadanos, y la designación de candidatos mediante elecciones primarias. Otros procedimientos a estudiar o experimentar podrían ser: estatutos públicos y de obligado cumplimiento a instancia de parte; control público de los procesos electorales internos si lo solicita una gran parte de los afiliados; control público de las finanzas de los partidos; reconocimiento de las funciones internas de partido como de interés colectivo al servicio de la comunidad; compatibilización de las funciones políticas (representativas o internas) con las profesionales (evitar sistemas de incompatibilidad rígidos, y optar siempre que sea posible por el *part-time*), etc.

Pero las soluciones no pueden depender únicamente de una regulación pública más o menos afortunada. Son los mismos partidos los que han de adoptar unas formas de organización y de funcionamiento que posibiliten su enraizamiento social y la participación popular. Por ejemplo:

— Carácter público de las reuniones de sus órganos representativos más importantes.

— Sistema proporcional para la elección de sus órganos dirigentes y posibilidad de constituir corrientes o tendencias (al menos en los períodos precongrsuales).

— Elecciones primarias también para la designación de candidatos a ocupar cargos internos.

— Pluralidad de formas de organización de base (territorial, lugar de trabajo, profesión, actividad social o cultural, etc.).

— Reclutamiento prioritario de los militantes entre aquellos ciudadanos que tienen funciones representativas (de carácter sindical, asociativo, profesional, económico, cultural, deportivo, etc.).

La participación popular es un mecanismo complementario de la institucional-electiva, que garantiza mejor la representación de intereses especiales o sectoriales.

— Reconocimiento del derecho que tienen los simpatizantes y votantes a participar en la vida del partido: elecciones primarias, posibilidad de asistir a sus Congresos, etc.

— Estructura descentralizada del partido y amplia autonomía de elaboración y ejecución de los organismos intermedios y de base.

— Los locales de las organizaciones de base entendidos como de carácter público (información política, centros sociales y recreativos) y también como medio de prestación de servicios y de cooperación social.

— Recurrir a los métodos modernos del conocimiento del estado de la opinión pública y de las aspiraciones sociales, así como de información y comunicación, para conectar con la población.

— En general, un funcionamiento escrupulosamente democrático y transparente, la despersonalización y la desinteriorización de los debates, y la seriedad y continuidad en el trabajo hacia fuera son condiciones imprescindibles para que los políticos obtengan la credibilidad necesaria para ser buenos instrumentos de participación política.

Participación popular directa o mediante asociaciones no partidarias

La democracia se apoya en las instituciones representativas (gobernar), en las elecciones (designar los gobernantes o representantes del pueblo) y en los partidos (presentar los programas y los candidatos). Pero no termina aquí. Es posible el recurso directo a la población (referéndum, consulta popular). Es necesario (la Constitución incluso lo exige) articular formas de participación específicas para los sindicatos y las asociaciones, para las organizaciones de usuarios y consumidores, y

Es importante desarrollar la participación popular para contribuir a democratizar sectores del Estado y de la vida económico-social poco controlados por las instituciones representativas.

para los ciudadanos en general (mediante figuras como el derecho de petición y la audiencia pública). Pero la participación está poco regulada y, por tanto, muy poco desarrollada. También es preocupante que los partidos democráticos y de izquierda no hayan demostrado hasta ahora una preocupación eficaz en este sentido. La participación popular es un mecanismo complementario de la institucional-electiva que garantiza mejor la representación de intereses especiales o sectoriales (debido a la complejidad creciente del Estado y a la fragmentación de la sociedad). Pero es, sobre todo, importante desarrollar la participación popular o cívica para contribuir a democratizar (descentralizar o hacer más transparentes y más próximos, más sensibles al interés colectivo) sectores del Estado y de la vida económico-social poco controlados por las instituciones representativas (seguridad social, sector público o parapúblico de la economía, gran empresa privada nacional o multinacional, justicia, medios de comunicación social, instituciones y empresas de servicios públicos, etc.). Asimismo, el desarrollo del asociacionismo de base y la creación de institutos y mecanismos participativos tenderá a reforzar la identidad y la acción colectiva de los grupos sociales con menos poder económico, político y cultural.

Algunas líneas de actuación pueden ser:

— Desarrollo legal de las exigencias constitucionales citadas por las leyes del Estado de carácter sectorial (sanidad, consumo, enseñanza, seguridad social, empresa pública, etc.) y por la legislación autonómica. Un criterio que me parece especialmente importante es que la legislación básica del Estado no ponga limitaciones sino que impulse la creación de figuras participativas.

— Todas las instituciones de representación directa, desde las Cortes hasta los Ayuntamientos, han de poder regular el

derecho de referéndum o consulta, de audiencia pública y de petición, de tal forma que haga posible también su utilización por iniciativa de los ciudadanos.

— Una fórmula específica de regular la participación es la de las cartas de derechos de los ciudadanos o usuarios en un determinado campo de la vida social (por ejemplo: transportes, medio ambiente, medios de comunicación social, etc.).

— La descentralización de las grandes ciudades es uno de los grandes instrumentos de participación. Hace posible innovar el sistema electoral (por ejemplo: candidaturas individuales o de colectivos no partidarios), verificar la eficacia de las figuras participativas de carácter general (por ejemplo: consulta popular, derecho de petición) y experimentar nuevas formas de participación (por ejemplo: consejos mixtos en diversos campos de la acción pública: seguridad, deportes, economía, etcétera).

— Actualmente (en el marco de la crisis económica, de la acentuación de las demandas sociales y de la insuficiencia de recursos públicos), para combatir también la tendencia a la burocratización y despersonalización de la acción pública es fundamental multiplicar las fórmulas de cooperación y de autogestión. Pero la tradición administrativa y la inercia política (institucional y partidaria) tienden más a actuar por la vía del presupuesto y del reglamento, del funcionario y de la contratación clásica. Algunas experiencias, en el campo juvenil especialmente, demuestran que la economía social y la organización de base pueden resolver problemas (de ocupación, de rol, de servicio personalizado, de integración, etc.) que de otra manera no se resolverían.

— Por último, no se puede olvidar que las instituciones y los partidos pueden contribuir mucho a vitalizar la sociedad civil, no practicando una política cliente-

lar basada en las subvenciones y los favores, sino por la promoción de las asociaciones de toda clase, reconociéndolas como interlocutores válidos, haciéndolas participar en la actividad institucional, proponiendo fórmulas de colaboración y, evidentemente, admitiendo la necesidad de mantener una independencia de criterio y una actitud crítica y reivindicativa.

Sociedad y cultura política

La izquierda ha favorecido siempre, en sus esquemas analíticos, al grupo o la clase, entendido, sobre todo, en su dimensión más amplia y como base de grandes movimientos sociales y políticos. Se ha ocupado poco del pequeño grupo y aún menos del individuo, hoy convertidos en protagonistas de la sociedad civil. Por otro lado, como la práctica de la izquierda ha sido, sobre todo, de oposición, de

La izquierda se ha ocupado poco del pequeño grupo y aún menos del individuo, hoy convertidos en protagonistas de la sociedad civil.

confrontación con el Estado (exterioridad mutua en el caso español), no ha desarrollado una *cultura política del interés general* o del bien común, es decir, una cultura

de síntesis (gobierno). Mantener hoy una cultura política estrictamente clasista conduce a una peligrosa esquizofrenia (que se expresará frecuentemente en la confrontación entre cargos de gobierno y cuadros de partido) y, sobre todo, desarma teóricamente para interrogar y hacer propuestas a la realidad social.

Hay una evidente inadecuación del discurso lucha de clases —movimiento social (obrero o popular)— frente de izquierdas o de los trabajadores, respecto a la realidad social actual caracterizada por la fragmentación, los corporativismos, la oposición entre el mantenimiento o mejora de los ingresos de quienes trabajan y la creación de puestos de trabajo, la multiplicación de los privilegios por un lado y de las marginaciones por el otro... Aparecen nuevos movimientos, nuevos conflictos (algunos muy generales, como el

feminismo, el pacifismo, los nacionalismos y regionalismos, otros de carácter microsociales), pero no son integrables al esquema clasista tradicional. Tampoco los conflictos obreros, la mayoría de las veces de carácter local o sectorial, tienen una dimensión global y de transformación social. Es decir, la crisis económica actual provoca unos efectos sobre la estructura social que no concuerdan con los esquemas clasistas dicotómicos de la vulgata marxista. Y, sobre todo, *falta el gran movimiento social alternativo*. La práctica política de izquierdas no puede ser, pues, la de representar una clase social, con una función más o menos mesiánica, en y ante las instituciones del Estado democrático, pero sí que ha de arbitrar los conflictos, según unos objetivos y unos programas, priorizando la síntesis y la negociación.

La democracia se consolida en sociedades muy pluralistas en las cuales hay una multiplicidad de conflictos, pero también importantes intereses y valores comunes. El clasismo mesiánico es anacrónico en relación con la estructura social e incompatible con el sistema democrático. Lo que no quiere decir que la izquierda se desinterese y deje de defender a *los trabajadores y a los sectores populares*. Al contrario, en la medida que no los mitifica y que no los convierte en objeto de discurso los puede defender mejor. Y lo ha de hacer: no solamente porque son sus electores principales (la democracia también quiere decir que las fuerzas políticas defienden intereses sociales concretos), sino también porque la función histórica de la izquierda es ser el poder de quienes no lo tienen, conquistar los derechos de los sometidos a los privilegios, aumentar las libertades reales de los sectores más sacrificados de la sociedad, disminuir las desigualdades de toda índole. Es decir, democratizar la sociedad en todos sus niveles.

Pero nos encontramos, por este camino, con un nuevo problema. La izquierda

ha justificado su papel específico en la democracia como promotora de una política de más *igualdad social*. Pero hoy no parece que en las sociedades modernas se manifiesten grandes demandas de igualdad. Antes al contrario: en todos los sectores de la sociedad predominan (según los estudios sociológicos y las encuestas de opinión de los últimos años) actitudes y valores de diferenciación, de exigencia, de estatus individual o de pequeño grupo; de defensa, incluso, de la desigualdad como garantía del derecho al progreso individual. Incluso los sectores sociales más bajos no reclaman tanta igualdad (intuyen, probablemente, que sería una demanda utópica) como, por ejemplo, más asistencia, trabajo, bienestar. La igualdad cuestionada va acompañada de la crítica generalizada a la extensión ilimitada de los servicios públicos de gestión directa. Es decir, a la forma que tradicionalmente ha permitido a la izquierda dar servicios a todos en el marco del Estado democrático del bienestar social (*welfare*). Se critica el coste creciente de los servicios, el aumento de la imposición, el peso de la maquinaria administrativa, la excesiva reglamentación, la relación burocrática con los ciudadanos, etc. En esta cuestión, como en la anterior, la izquierda corre el riesgo de hacer un discurso que cuente cada día con menos aceptación social, o, para disimularlo, de situarse a la defensiva y caer en una práctica sin principios orientadores que le hagan perder identidad y, por tanto, acabar conduciéndola también a la derrota. El objetivo de mayor igualdad social es irrenunciable, y la extensión del *welfare state*, y más en un país como el nuestro, es un instrumento indispensable. Pero son cuestiones que no se pueden plantear ni conseguir como antes. Es necesario, primero, entender el por qué de las reacciones sociales negativas y qué aspiraciones

La crisis económica actual provoca unos efectos sobre la estructura social que no concuerdan con los esquemas clasistas dicotómicos de la vulgata marxista.

expresan. Y, después, *buscar nuevos medios* teniendo en cuenta la crisis financiera del Estado hoy, y el aumento de las demandas sociales derivadas de la crisis eco-

nómica. La igualdad social es un objetivo que es contradictorio con otros que también es necesario asumir, como el derecho al progreso de los diferentes grupos e individuos, o la sanción —positiva o negativa— del esfuerzo, del riesgo, de la responsabilidad. Por tanto, es necesario arbitrar entre estos objetivos y el de la búsqueda de mayor igualdad social.

La crítica a la extensión o monopolio de los servicios públicos no solamente expresa una insatisfacción por el funcionamiento burocrático de la Administración pública; también manifiesta que hoy una parte importante de la sociedad lo que quiere es diversidad de ofertas para poder escoger, y relación privada con el servicio para no depender de reglas exteriores. Evidentemente, cuando se reclama pluralidad de la oferta escolar, televisiva o médica, se ha de suponer que los mínimos ya están cubiertos para todo el mundo por medio de la oferta pública. Esta garantía no se puede abandonar de ningún modo.

Nuevos temas para la reflexión económico-social

El pensamiento tradicional de la izquierda, en materia de política económico-social, cuando ha llegado al Gobierno, se ha basado en tres grandes objetivos: expansión de la producción, redistribución social del producto y aumento del bienestar de todos (especialmente de los sectores más desafortunados) por medio de servicios públicos. Los principales instrumentos: nacionalizaciones, política fiscal para financiar el crecimiento de la oferta pública, y participación de los trabajadores dentro del marco de una política económica regulada por la planificación. Hoy es necesario plantearse inevitablemente reducir la inflación y el déficit público. La expansión ha de esperar, se sacrifica la redistribución, y el malestar social se agrava. Al no haber puesto al día sus ins-

La función histórica de la izquierda es ser el poder de quienes no lo tienen, conquistar los derechos de los sometidos a los privilegios.

trumentos (teóricos y públicos), la izquierda se ha encontrado desarmada frente a la crisis actual. Especialmente la izquierda más «marxista», incapaz de responder al ataque neoliberal (curiosamente, la respuesta de izquierdas ha sido más contundente y elaborada en los países anglosajones).

El instrumental tradicional se revela muy insuficiente. Las nacionalizaciones forman parte de la cultura ideal de la izquierda y expresan, a la vez, la adhesión de los trabajadores al Estado democrático concebido como un instrumento de bienestar colectivo, y la creencia de que se puede ordenar la vida económica a partir de un centro consciente, racional y planificador. Pero hoy, cuando heredamos un sector público tan importante como poco rentable, ya no es necesario nacionalizar para sumar a los trabajadores a la democracia (si no es por la vía más cara de garantizar el puesto de trabajo), ni se puede mantener el mito del gran ordenador de la economía en sociedades complejas y dependientes. La política industrial actual se ha de realizar a partir de una multiplicidad de objetivos, de actores y de instrumentos, como la política comercial. La contabilidad nacional no descubre las nuevas realidades económicas y sociales (economía sumergida, motivaciones psicosociológicas en relación con la inversión y el consumo, rol de las unidades familiares...). La idea del Plan nacional se basaba en la existencia de un espacio económico nacional considerado estable y autónomo, y no es precisamente el caso de hoy. En las actuales circunstancias es difícil plantearse un aumento importante de los ingresos públicos por la vía de la fiscalidad, ya que se consideraría que sería crear más dificultades a la inversión y, por tanto, a la reactivación económica. Cuando no hay crecimiento ni movimientos sociales unificantes no se pueden esperar grandes resultados, a corto plazo, de la participación de los trabaja-

dores en la vida económica de la empresa. Es positivo siempre, pero hoy sólo puede servir para salvar o mejorar situaciones concretas, no para modificar la orientación económico-social del país. Y entonces, ¿qué hemos de hacer?

La izquierda, sobre todo si gobierna, ha de resolver el problema de la *regulación social*. En una sociedad que estalla en mil corporativismos y en la cual sólo existe el crecimiento de los descontentos y de las marginaciones, en la que no funcionan las fórmulas de regulación tradicionales (ni la liberal-oligárquica del siglo XIX, ni la socialdemocrática del *welfare* o modelo keynesiano), si no se construye un nuevo sistema de regulación social el fracaso está asegurado.

El objetivo de la nueva regulación o nuevo pacto social ha de ser el de establecer las bases de un **compromiso democrático basado en una combinación de flexibilidad y de solidaridad, de desreglamentación parcial de la vida económica y social,** y de desarrollo de las normas contractuales entre los actores socio-económicos, de dar más autonomía y apoyo a la iniciativa de los actores privados y de reforzar los poderes públicos locales o descentralizados. Citemos algunos aspectos concretos:

a) Nuevas relaciones sindicatos-patronal: mayor flexibilidad laboral y mayor participación sindical en la gestión de la empresa, por ejemplo. En general, multiplicar la negociación a todos los niveles sobre la base de las concesiones mutuas a fin de disminuir las rigideces.

b) Sanear la Administración pública para provocar una disminución radical de los costos de funcionamiento, sobre la base de los principios de la austeridad, la transparencia y la eficacia. La reforma administrativa ha de servir para implantar la organización operativa por programas y resultados, es decir, basada en la

lógica profesional y no en la lógica categorial.

c) La política de prestaciones sociales ha de tender a asegurar prioritariamente la protección frente a los grandes riesgos y a garantizar los mínimos vitales, pero es necesario reducir el exceso de oferta pública de carácter social y cultural que no cubre necesidades elementales, y que se dirige a menudo a clases medias y altas. Es decir, se ha de reintroducir la oferta privada y la regulación mediante el mercado, en sustitución de una parte de los actuales servicios públicos.

d) La nueva sociedad democrática ha de desarrollar múltiples fórmulas de economía y de cooperación sociales, especialmente en el ámbito de los servicios. No es posible, ni deseable, el financiamiento público y la gestión burocrática de muchos

La meta de una mayor igualdad social es irrenunciable, y la extensión del Estado del bienestar es un instrumento indispensable.

servicios de carácter social o cultural (jóvenes, ancianos, esparcimiento, deporte, calidad de vida en general). Es necesaria la autogestión, la experimentación, el intercambio y la colaboración entre los particulares...

e) Es necesario asumir el paro como una realidad destinada a durar, y tender, a la vez, a disminuirlo y a contrarrestar sus efectos económicos y psicosociales más negativos. La reducción del tiempo de trabajo y la redistribución correspondiente del trabajo remunerado ha de ser un componente básico del nuevo pacto social. También se han de multiplicar los roles sociales, es decir, la distribución entre todos de responsabilidades y de tareas reconocidas socialmente.

f) Nos hemos de replantear la naturaleza de los actores económicos y sus requerimientos. El peligro en el cual se puede caer hoy fácilmente es pasar del rechazo total de la iniciativa privada capitalista a su aceptación acrítica e incluso a su exaltación. No es posible ni deseable estatizar

la economía. Pero no hay (o es escasa) tampoco una gran o mediana burguesía numerosa con iniciativa y vocación inversora. Es necesario potenciar la iniciativa privada, pero donde ésta es dinámica es, sobre todo, en algunos sectores de la pequeña y mediana empresa y en el sector social o cooperativo. Hay que promocionar nuevos empresarios definidos por los proyectos y por la decisión de emprender, los cuales se encuentran entre técnicos y trabajadores cualificados y entre los jóvenes (con título universitario o sin él). Asimismo, es imprescindible potenciar las funciones socio-económicas de los poderes municipales, con más capacidad de inversión y con más conocimiento y capacidad de respuesta ágil ante las situaciones locales.

g) La descentralización política y administrativa, el desarrollo de los mecanismos de participación popular, la adecuación a los nuevos requerimientos de la vida económica, y la socialización de los nuevos medios y de las nuevas formas de la información, son cuestiones clave para la política de la izquierda.

h) La exigencia de sanear la gestión de la Administración pública también es necesaria en relación con la empresa privada. Los bancos, las grandes empresas industriales o comerciales, ¿no despilfarran? ¿Han introducido el balance social y la lógica profesional en su funcionamiento y en su organización?

i) Desde una perspectiva más general, la izquierda ha de plantearse una acción decidida para combatir las nuevas tendencias a la exclusión de grupos y de individuos, y a la privatización autoritaria de espacios y de funciones públicas que han de continuar siéndolo. La aparición de brotes racistas, la reaparición del rechazo al trabajo de las mujeres, el desprecio por los ancianos, el miedo de los jóvenes, son elementos reaccionarios en la vida social

y perturbadores del compromiso democrático. En la vida económica y urbana se manifiestan presiones privatizadoras como los grandes centros comerciales (en los cuales no rigen las libertades públicas) o conjuntos residenciales con jardín de uso privado y con policía particular. La privatización de espacios ciudadanos y de funciones que suponen autoridad son un gran retroceso democrático, y pueden conducir a una escala de tensiones sin posibilidad de regulación social.

En resumen, lo que proponemos es introducir en nuestra cultura en materia de política socio-económica los instrumentos necesarios para actualizar los ideales de progreso con solidaridad, y de eficacia con participación. Por eso es necesario un nuevo instrumental que flexibilice las relaciones entre Administración pública y sociedad civil, así como entre los actores de naturaleza privada. El nuevo compromiso democrático se ha de buscar en unos principios de Derecho público desarrollados por normas de carácter contractual.

Conclusión

La izquierda ha perdido la iniciativa en el terreno de las ideas, de la cultura (en el más amplio sentido de la palabra). No recuperar la iniciativa cultural significaría ir perdiendo progresivamente la fuerza y las posiciones adquiridas en todos los niveles de la vida política y social. La ofensiva ideológica de la derecha (neoliberalismo, nacionalismo, integrismo moral, irracionalismo, etc.) ha tenido éxito porque la izquierda no ha puesto al día su cultura política y porque frente a las exigencias de la nueva situación ha renunciado a su identidad cultural: la izquierda en Catalunya ha de ser catalanista, y en España combatiente en favor de la soberanía nacional, pero no nacionalista en sentido esencialista y agresivo. La izquierda no puede renunciar a ser socialmente solida-

El objetivo de un nuevo pacto social ha de ser el de establecer las bases de un compromiso democrático basado en una combinación de flexibilidad y solidaridad.

ria, y no simplemente estatalizadora (antes) o capitalista (ahora). La izquierda ha de ser realista en el plano internacional, pero dentro del marco de una política de paz y de cooperación con los pueblos (especialmente América Latina), y no solamente europeísta y atlantista. Ahora bien, para rehacer su base técnica y cultural la izquierda ha de someter la realidad a un análisis riguroso, y replantearse, sin ad-

mitir tabús intocables, su instrumental de conceptos y de ideas. Sin miedo al vértigo. No son las nuevas ideas las peligrosas: es necesario experimentarlas. Lo que es peligroso es no tenerlas cuando el tiempo las reclama.

Este artículo fue escrito originalmente en catalán para la revista socialista *Debat*.